

67 D.P.R. 301 (1947) PUEBLO V. BÁEZ

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, demandante y apelado,

v.

TIMOTEO BAEZ FUENTES, conocido por José GAMALIER BAEZ, acusado y apelante.

Núm. 11815

67 D.P.R. 301 (1947)

5 de mayo de 1947

SENTENCIA de F. Gallardo Díaz, J. (Bayamón), condenando al acusado por delito de Asesinato en Primer Grado. Confirmada.

DERECHO PENAL -- JUICIO EN GENERAL -- PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES -- PARA RESOLVER LA CUESTIÓN DE LOCURA DEL ACUSADO. -- El someter a **peritos** la cuestión de locura del acusado en el momento del juicio es necesario solo cuando surge en la mente del juez sentenciador duda substancial en cuanto a esa locura.

ID. -- ID. -- ID. -- ID. -- Una moción para someter a **peritos** la cuestión de locura del acusado en el momento del juicio, va dirigida a la discreción de la **corte** inferior. Solo un abuso de esa discreción justifica el intervenir en apelación con la actuación de la **corte**.

ID. -- ID. -- ID. -- ID. -- Una **corte** no abusa de su discreción al negarse a someter a **peritos** la cuestión de locura del acusado en el momento del juicio cuando la moción a ese efecto esta sostenida por una declaración jurada preliminar de una trabajadora social, que no tenía preparación medica alguna, relativa al historial social y clinico del acusado a quien ni siquiera ella había visto.

ID. -- ID. -- ATRIBUCIONES DE LA **CORTE** Y DEL JURADO -- MÓVIL O AUSENCIA DEL MISMO. -- Si la ausencia de móvil establece o no locura del acusado al este cometer el delito era cuestión, bajo las circunstancias de este caso, para el jurado, y no una testigo determinarla. Por tanto, la negativa de la **corte** inferior a permitirle a una trabajadora social, quien no tenía preparación medica, que expresara su conclusion en cuanto al móvil del acusado basada en sus observaciones de este y las informaciones que los familiares del mismo le dieron para establecer tal locura de la ausencia de móvil, fue correcta.

ID. -- EVIDENCIA -- DE OPINION -- DE LA PRUEBA PERICIAL -- **PERITOS** MÉDICOS. -- Si un médico que ha declarado en cuanto a su preparación medica y su experiencia profesional esta o no capacitado para expresar su opinión en cuanto a la condición mental de un acusado, es cuestión que compete a la discreción de la **corte** inferior.

ID. -- ID. -- MATERIALIDAD Y COMPETENCIA -- EVIDENCIA ADMISIBLE POR RAZON DE HABERSE ADMITIDO EVIDENCIA SIMILAR DE LA PARTE CONTRARIA. -
- Una **corte** no abusa de su discreción al permitir la declaración de un testigo especialmente si ya

ha permitido al propio acusado presentar una declaración similar por otro testigo.

ID. -- APELACIÓN -- REVISION -- VEREDICTO Y CONCLUSIONES DEL JURADO SOBRE LAS PRUEBAS -- PRUEBA CONTRADICTORIA. -- Cuando se somete al jurado, con las debidas instrucciones, la controversia relativa a la locura del acusado y a este se le declara culpable, el veredicto sera sostenido en apelación si nada en el record justifica que lo alteremos.

F. Hernández Vargas, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.

EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR SNYDER emitió la opinión del tribunal.

[P302]

El acusado apela de una sentencia de reclusión perpetua después de haberlo declarado un jurado culpable de asesinato en primer grado.

Se queja primeramente el acusado de que el juez de distrito declaro sin lugar su moción para someter a tres **peritos** la cuestión de la locura del apelante en dicho momento, a tenor con el artículo 440 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, esto solo es necesario cuando surge en la mente del juez sentenciador alguna duda sustancial en cuanto a la locura del acusado. Una moción de esta índole va dirigida a la discreción de la **corte** inferior. Solamente cuando la **corte** de distrito abusa de su discreción es que estamos justificados en intervenir con su resolución. *People v. Fountain*, 170 Cal. 460, 467 (1915); *People v. Loomis*, 170 Cal. 347 (1915); *People v. Hettick*, 126 Cal. 425 (1899); *People v. Keyes*, 178 Cal. 794 (1918); *Pueblo v. Villarrubia*, [P303] 54 D.P.R. 346; *Pueblo v. Nazario*, 53 D.P.R. 239; *Iturrino v. Corte*, 50 D.P.R. 934.

Nada encontramos en el record que nos obligue a decir que la **corte** inferior tenía que seguir en este caso el procedimiento provisto por el artículo 440. En apoyo de su contención, el acusado presento una declaración jurada preliminar de una trabajadora social en relación con el historial social y clínico del acusado. Esta trabajadora social ni siquiera había visto al acusado. Si bien los hechos expuestos en su declaración jurada quiza habrían justificado la actuación de la **corte** a tenor con el artículo 440, no podemos decir que fue un abuso de discreción el negarse a hacer tal cosa a base de su declaración jurada. La única otra prueba presentada por el acusado sobre esta cuestión fueron dos declaraciones juradas de dos especialistas, en cuanto a que necesitarían treinta días para poder hacer un examen mental al acusado. Cuando el caso fue llamado a juicio y el acusado renovó su moción, la **corte** inferior a iniciativa propia oyó los testigos del Fiscal para determinar si debía invocarse el artículo 440. Sus declaraciones no convencieron a la **corte** de que esta acción debía tomarse, y nada encontramos en dichas declaraciones que nos exija resolver lo contrario.

El acusado señala como su segundo error la negativa de la **corte** de distrito a permitirle a la trabajadora social contestar la siguiente pregunta: "¿De acuerdo con las observaciones que usted hizo de este acusado cuando lo entrevisto y de acuerdo con esa información que usted como trabajadora social recibió de la familia de este acusado, usted llegó a alguna conclusión en cuanto

al móvil de este caso?"

El acusado trataba, probando la ausencia del móvil, de establecer como defensa la locura cuando cometió el delito. La **corte** fue liberal al permitirle a la trabajadora social, quien no tenía preparación medica, declarar ampliamente en cuanto al historial del acusado y expresar su opinión en cuanto a que este no podía distinguir entre el bien y el mal [P304] Pero tocaba al jurado y no a la testigo, determinar la cuestión del móvil que tuvo el acusado bajo las circunstancias de este caso. Cf. *El Pueblo v. Valle*, 29 D.P.R. 555; *Wiggins v. State*, 27 S.W.2d 236 (Texas, 1930); VII Wigmore *on Evidence*, secciones 1963-4 (3ra. ed.). La **corte** inferior no cometió error al no permitir esta pregunta.

En su tercer error el acusado se queja de la actuación de la **corte** inferior al permitirle al Dr. Julio R. Rolenson declarar que, basado en un examen del acusado y habiendo observado a este en la cárcel de distrito, el acusado estaba mentalmente normal y podía distinguir entre el bien y el mal. La declaración del Dr. Rolenson fue presentada por el Pueblo en *rebuttal*, después que el abogado del acusado había presentado prueba de que este estaba loco.

El Dr. Rolenson declaro que es graduado de un colegio de medicina; que ha ejercido su profesión medica durante 25 años; que es el médico de la cárcel de distrito de San Juan; que hace un examen físico y mental de todos los confinados y les da tratamiento; que estudio psiquiatría en el colegio como asignatura; que nunca ha ejercido en psiquiatría, sino en medicina general.

La capacidad del Dr. Rolenson para expresar su opinión en cuanto a la condición mental del acusado bajo estas circunstancias, era cuestión que competía a la discreción de la **corte** de distrito. Véanse 54 A.L.R. 860, 863; *Bell v. Acacia Mut. Life Ins. Co.*, 16 So.2d 821 (La., 1944). No podemos decir que la **corte** inferior abuso de su discreción, especialmente cuando ya había permitido al acusado presentar prueba similar por la trabajadora social.

El cuarto error señalado es que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba. El acusado, un muchacho de 18 años, dio muerte a una señora, vecina suya, cercenándole la cabeza con un machete. Alegó ser inocente debido a estar loco, y presento prueba en apoyo de su alegación. La **corte** inferior sometió al jurado, con las debidas instrucciones, la cuestión de locura. Cf. *Fisher v. United States*, [P305] --U.S.--, 90 L. ed. 1078. Al declarar culpable al acusado de asesinato en primer grado, el jurado resolvió que el apelante estaba cuerdo cuando cometió el delito. Nada encontramos en el record que justifique que alteremos el veredicto.

*La sentencia de la **corte** de distrito será confirmada.*

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.